

NOTA DEL DIRECTOR

El número 27 de “Derechos y Libertades” contiene investigaciones que abordan dimensiones actuales del Derecho internacional de los derechos y también de su regulación interna. A ellos cabe añadir trabajos que abordan dimensiones netamente filosóficas junto a otros referidos a aspectos más específicos de lo que podríamos considerar la vertiente social de los derechos.

En el trabajo *“La definición implícita del concepto de minoría nacional en el Derecho internacional”*, Eloísa González Hidalgo y Eduardo Ruiz Vieytez analizan el proceso a través del cual se ha intentado ir elaborando una definición del concepto de “minoría nacional” en el Derecho internacional. Al respecto, nos ofrecen una identificación de los elementos definitorios, que en las últimas décadas han sido consolidados por organismos internacionales, especialmente en el ámbito europeo. Entre ellos se incluyen, por un lado, elementos objetivos como la inferioridad numérica, la diferenciación cultural, étnica, religiosa o lingüística, la nacionalidad jurídica o ciudadanía del Estado de residencia y la temporalidad de la presencia en el territorio del Estado. Por otro lado, elementos subjetivos como la conciencia o identidad colectivas, y el deseo expresado por el grupo de preservar sus características específicas.

La perspectiva internacionalista es también la del trabajo de Montserrat Abad Castelos, *“La defensa de los derechos humanos por las ONG desde el prisma del Derecho internacional”*. En él, a partir de la constatación del aumento del número y las funciones de las Organizaciones No Gubernamentales, se plantea hasta qué punto su capacidad de influencia también se ha expandido en el ámbito de los derechos humanos. Así, se constata que la acción de las ONG es, en términos generales, muy positiva, tanto para las sociedades internas como para la sociedad internacional. Tanto es así que algunas de las acciones que las ONG llevan a cabo han llegado a dejar una huella visible en el Derecho internacional. Sin embargo, es necesario tomar en consideración que algunas de sus funciones todavía podrían desarrollarse más. Al mismo tiempo, es necesario tener en cuenta que el futuro impacto de las ONG en la sociedad y en el ordenamiento jurídico internacional dependerá no sólo de sí mismas sino también de los Estados.

Por su parte, Ana María Marcos del Cano, propone un análisis de una de las múltiples dimensiones del fenómeno migratorio que afectan directamente a los derechos. En *“Los derechos de los españoles residentes en el exterior:*

especial referencia a los derechos de participación” y dentro del marco derivado de la última reforma de la Ley Electoral en nuestro país, se desarrolla un recorrido histórico por las leyes que han regulado la emigración, y se presenta un análisis de los derechos de participación, en concreto, los de participación política, que son, por otra parte, una de las mayores reivindicaciones de los inmigrantes residentes en nuestro país.

Enrique Cebrián Zazurca analiza uno de los conceptos clave en el actual debate político-jurídico, como es el de democracia deliberativa en *“La filosofía de Jürgen Habermas como fundamento de la democracia deliberativa”*. Para ello, pone en relación las tesis deliberativas con la obra de Habermas. La filosofía habermasiana ha cimentado el concepto de democracia deliberativa, que ha terminado por convertirse en el fruto político por excelencia de toda una trayectoria intelectual. Este artículo se detiene en los hitos de ese proceso, con la intención de resaltar el hecho de que hablar de democracia deliberativa equivale a hacerlo de una sólida construcción teórica, de cuyo olvido no puede esperarse nunca una solvente traducción práctica.

El siguiente trabajo también se sitúa en el ámbito filosófico. En efecto, en *“La sinrazón de la razón como estrategia. Razones en favor de la racionalidad de los agentes morales*, María Eugenia Rodríguez Palop mantiene la tesis según la cual la especificación de la razón como un fenómeno subjetivo no puede agotar, aunque lo pretenda, la definición de la razón, y ello, entre otras cosas, porque se apoya en el presupuesto irracionalista del egoísmo. Por ello, la adopción de un punto de vista racional exige la incorporación de un punto de vista imparcial y la imparcialidad se alcanza sobre todo en procesos dialógicos de razonamiento. Dado que el aspecto normativo no puede eliminarse en el discurso racional, tampoco puede eludirse la conexión que existe entre racionalidad y moralidad.

Regresamos al ámbito supranacional en el siguiente trabajo, *“La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la libertad religiosa: un análisis jurídico-político”* en el que Fernando Arletazz analiza los rasgos generales de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre la libertad religiosa: para ello, identifica algunas líneas jurisprudenciales. En primer lugar, aquella según la cual el Tribunal entiende la libertad religiosa en el sentido clásico liberal, como un derecho individual que garantiza una protección frente a la coacción del Estado o de otros individuos. En segundo lugar, la que afirma que el concepto de igualdad asociado a la

libertad religiosa se refiere a las dimensiones formales de la igualdad, no incluyendo por tanto prestaciones positivas o de derechos especiales para los grupos religiosos en situación de desventaja. En todo caso, la jurisprudencia europea deja a los Estados un margen de apreciación bastante amplio al momento de establecer restricciones al derecho en cuestión.

José Manuel Rodríguez Uribes aborda un tema que tiene amplia trascendencia en el discurso contemporáneo de derechos, tanto a nivel interno como internacional. En *"Sobre el terrorismo y sus víctimas"* propone una determinada interpretación de las nociones de terrorismo y de víctima. Pare ello, propone dos formas de entender el terrorismo: como fin que solo puede darse en sociedades democráticas, o como método, susceptible de explicar muchos más fenómenos violentos contemporáneos o históricos. Respecto a la noción de víctima se explica su mejor situación normativa a partir de la comprensión del terrorismo como un peligro global tras el 11-S y se justifica por una toma de posición relevante y novedosa de la comunidad internacional en relación con ellas: las víctimas del terrorismo, hoy, son consideradas víctimas del violaciones de derechos humanos y no solo víctimas de un delito particular. Eso justifica el reconocimiento de determinados derechos y su específica posición en el proceso penal.

En tiempos de crisis como los actuales, resulta plenamente pertinente la reflexión sobre la fundamentación y la articulación jurídica del derecho al trabajo. En *"Una aproximación al debate contemporáneo sobre el derecho al trabajo"*, Daniel Pérez del Prado repasa cuáles son los rasgos configuradores de este derecho, las principales teorías contemporáneas que se han enunciado al respecto y pretende aportar, desde una perspectiva iuslaboralista y económica, algunas ideas en torno la consideración del derecho al trabajo como un auténtico derecho.

Y, de la misma manera, también resulta de actualidad la investigación de Jorge Gracia Ibáñez en su trabajo *"La violencia de género contra las mujeres mayores. Un acercamiento socio-jurídico"*. Y lo es porque vincula la dimensión de la edad a la del género, identificando así dos colectivos específicos cuya concurrencia exige una construcción teórica autónoma de este fenómeno como una realidad con algunas dinámicas y características propias aunque conectada con otras formas de violencia familiar como la violencia de género, como categoría más amplia, o la violencia familiar contra las personas mayores. Desde esa comprensión se analiza la articulación de respuestas adecuadas en términos tanto de eficacia como de justicia.

Y si abrimos este número con dos trabajos situados en la órbita de la regulación supranacional de los derechos, lo cerramos regresando a esa perspectiva, con el trabajo

“Tensiones entre el proceso de especificación de los derechos humanos y el principio de igualdad respecto a los derechos de las mujeres en el marco internacional”. En él, Víctor M. Merino Sancho analiza la interpretación doctrinal del proceso de especificación de los derechos humanos y cuestiona que se haya entendido la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres como el paradigma de proceso de concreción del sujeto titular de derechos. Aunque la Convención garantiza la igualdad de trato y la prohibición de discriminación como las estrategias en las que ha de basarse la protección de los derechos humanos de las mujeres, la igualdad de trato es insuficiente para admitir que dicho texto inicia un proceso como el referido. Por el contrario, el proceso de especificación en este ámbito exige la articulación de mecanismos jurídicos que aspiren a la igualdad material, que logren superar los obstáculos para una protección efectiva de los derechos.

Gregorio Peces-Barba Martínez